



FOTO: AP
PORTADA

LA HISTORIA DETRÁS

SEMANA revela los detalles de las operaciones militares que llevaron a las aterradoras ejecuciones extrajudiciales en diferentes regiones del país.

CUANDO ROBERT JAIRO MESA puso la denuncia por la desaparición de su hermano José en enero pasado, no se imaginó que estaba dando la primera puntada para que se produjera, nueve meses después, uno de los remezones más sonoros de la historia de las Fuerzas Militares.

Ese día de finales de enero le tomaron apenas sus datos. Y meses después, cuando su familia ya se estaba haciendo a la idea de que José había desaparecido, un funcionario de Medicina Legal llamó a Robert el viernes 22 de agosto y le dijo que en Ocaña habían identificado un cuerpo que podía ser el de su hermano.

Si esto hubiera ocurrido el año pasado en Colombia, casi seguramente no habrían dado

fosa común en una vereda a donde habían mandado decenas de cadáveres. Hasta allá fue y, a falta de funcionarios de la Fiscalía y de Medicina Legal, que estaban en paro, convenció al enterrador para que le ayudara con la exhumación.

Para ese día, primero de septiembre, ya llevaba cinco días de insoportable papeleo, pero lo más duro fue cuando el enterrador le dijo que su hermano aparecía de último en una fosa en la que estaban apilados seis cadáveres. Les tocó separarlos uno por uno. Estaban desnudos y sin bolsas. Y así reconoció algunos rasgos de otros de los muchachos desaparecidos de Soacha. Cuando llegaron al último, a José, lo identificó por sus iniciales tatuadas en los dedos.

baja en combate por el Ejército?

Robert volvió a Bogotá y les contó sobre su hallazgo a los familiares de otros muchachos desaparecidos que había visto en la fosa común. La noticia se regó como pólvora. Y casi de inmediato, saltó a los medios de comunicación, que bautizaron como “*falsos positivos*” el escándalo de los 11 muchachos, que más se demoraron en salir de Soacha que en aparecer muertos en combate en Ocaña.

LOS HALLAZGOS

Las denuncias de ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales no son nuevas. Pero los primeros indicios recogidos por Robert y por las autoridades eran tan graves, que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, no dudó en actuar. Primero, lanzó una frase que parecía una sentencia: “*Me dicen que hay reductos de Fuerza Pública que están exigiendo como resultado cuerpos*”, y después, nombró una comisión especial para investigar lo ocurrido, así como otras seis muertes que podrían ser también “*falsos positivos*” de la Brigada 14 en el Magdalena Medio.

La comisión tenía un detalle muy significativo, estaba liderada por un general activo, Carlos Arturo Suárez, lo cual les daba garantías a los uniformados; lo acompañaban tres militares más con tareas específicas y el único civil invitado fue Carlos Franco, quien por su trayectoria y su trabajo en la Vicepresidencia de la República se ha ganado el respeto de

ROBERT SACÓ A SU HERMANO DE UNA FOSA CON SEIS NN, ALLÍ DESCUBRIÓ A LOS OTROS DE SOACHA Y DIO EL PRIMER PASO PARA LA PURGA

con el cadáver. Pero esta vez fue posible gracias al nuevo Sistema Nacional de Identificación de Víctimas que cruza múltiples bases de datos para dar con los desaparecidos.

Esa misma noche Robert salió con destino a Ocaña. Las neveras de la morgue con NN estaban abarrotadas. Pero no vio a su hermano. Le dijeron que lo buscara en una

¿Cómo era posible que su hermano, desaparecido de Soacha el 26 de enero de este año, apareciera muerto el día siguiente, a las 10 de la noche, a más de 400 kilómetros de distancia? Aun peor, ¿cómo podía ser que su hermano, que trabajaba como obrero de construcción en Soacha, apareciera como un guerrillero dado de

legitimidad

Sin duda son mensajes confusos y que se pueden ver como una exaltación de los bandidos y de la ilegalidad. Pero las guerras tienen dos caras. La cara de una sociedad que debe buscar fórmulas distintas a la dialéctica de la sangre y el plomo para combatir los grupos irregulares. Y de ser generoso con el enemigo que se rinde. De ahí la reducción de penas, recompensas y beneficios a quienes se desmovilizan. Y la cara de un Estado que nunca puede perder la legitimidad en su lucha contra la violencia y el terrorismo. Un Estado que, como lo personificaba un general británico, lucha con una mano amarrada debido al estricto respeto a los derechos humanos y el derecho humanitario. De ahí la firmeza contra los militares que cometen crímenes con el uniforme. Ese control garantiza que no sean los propios Ejércitos los que destruyan la democracia cuando maten en su nombre.

A pesar de que el Ministerio de Defensa ha diseñado una política de derechos humanos —elogiada incluso por Naciones Unidas— hasta ahora ha sido más un ejercicio retórico que un parámetro real para evitar los desbordamientos. Muchos de los procesos contra los militares por violación de los derechos humanos no prosperan, hay solidaridad de cuerpo o las investigaciones son interpretadas por algunos sectores retardatarios del Ejército como una ‘guerra jurídica’ de la guerrilla.

Incluso, en el interior de las Fuerzas Armadas, se ha generado una división frente al tema de los derechos humanos. Por un lado, hay una línea encabezada por el general Montoya, que todavía ve con sospecha las investigaciones de la justicia, protege a sus tropas, y cree todavía en el ‘síndrome de la Procuraduría’. Su incuestionable eficacia militar —que lo convirtió en el héroe de la Operación ‘Jaque’— es comparable al anacronismo de su visión de las fuerzas militares, más anclada en la Doctrina de la Seguridad Nacional que en la filosofía de las guerras modernas. La otra línea la encabeza el general Padilla de León, un hombre menos tropero, pero con una visión moderna y universal del papel

de un Ejército en una sociedad en conflicto. Para Padilla, en esta etapa de la confrontación militar, con las Farc debilitadas, y con un control del territorio, los militares tienen que poner su legitimidad como su centro de gravedad, pues de la confianza que generen entre la población depende la consolidación de la política de seguridad democrática.

Pero más allá de los estilos de liderazgo de los generales, es necesario desmontar una cultura militar donde el fin justifica los medios y donde los ‘positivos’ son la tierra prometida para los ascensos, las condecoraciones y los permisos. Es indispensable cambiar de paradigma y buscar otros incentivos donde, como lo señaló Padilla, “*es preferible un desmovilizado a un capturado, y un capturado a un muerto*”. Esto reforzaría el mensaje de que el respeto a los derechos humanos no es incompatible con los buenos resultados en las operaciones militares. Por eso, es de esperarse que los cambios en las normas, en el sistema de ascensos y de control interno, se reflejen en un cambio de cultura y de doctrina militar.

CON LAS FARC DEBILITADAS, Y CON CONTROL DEL TERRITORIO, LOS MILITARES TIENEN QUE GANARSE LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN CIVIL

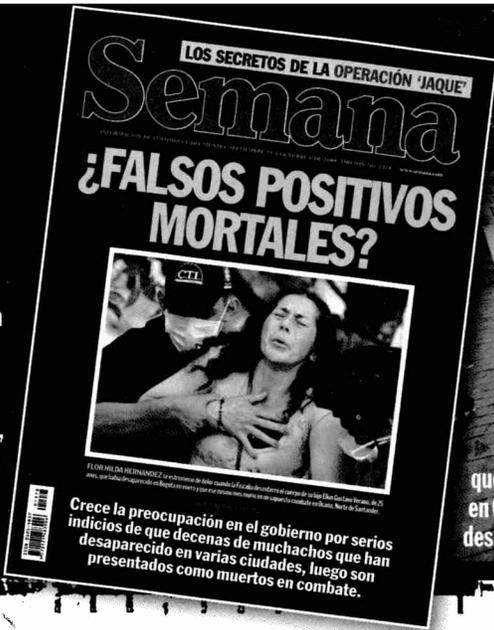
Las épocas de la Guerra Fría y de la doctrina de seguridad nacional quedaron en el pasado y son ingratamente recordadas por las naciones que sufrieron abusos de los militares en nombre de la libertad. Sobre todo cuando se rompió el mito de que las sanciones y los escándalos de las fuerzas

militares generan la desmoralización de la tropa y su estigmatización por la sociedad.

A pesar de los excesos, nunca como ahora los militares han tenido tantos recursos económicos, respaldo político y apoyo popular. El soldado de Colombia es hoy visto como un héroe de la patria. Y los resultados militares del último año, incluido el golpe espectacular de la Operación ‘Jaque’, demuestran que se está ganando la guerra. La nueva batalla ahora es por la legitimidad de nuestra fuerza pública, de su capacidad de conectarse con la sociedad civil, de conquistar ‘el corazón y la mente’ de la población, sin lo cual nunca se podrá ganar la guerra. Esta nueva guerra apenas comienza. ■

◀ A las 7:15 de la mañana del miércoles, el Presidente, el Ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares, sorprendieron al país con una rueda de prensa en la que anunciaron el retiro de 27 militares

▶ Hace un mes, SEMANA publicó un completo informe sobre el escándalo que provocó el remezón



Estas son las madres de los muchachos que aparecieron muertos en combate en Ocaña, apenas unas horas después de desaparecer de sus casas

Crece la preocupación en el gobierno por serios indicios de que decenas de muchachos que han desaparecido en varias ciudades, luego son presentados como muertos en combate.

DEL REMEZÓN

FOTO: DAVID OSORIO - EL TIEMPO

organismos de derechos humanos.

La tarea de ellos no era investigar si a los 11 muchachos los habían matado o no en combate, sino revisar el procedimiento que siguieron los militares implicados en las operaciones: es decir, qué tipo de análisis de inteligencia hicieron, cómo diseñaron el plan de las operaciones y qué tipo de controles aplicaron después sus superiores. En otras palabras, su propósito no era encontrar delitos, sino fallas de carácter administrativo.

La comisión tuvo acceso privilegiado a todos los archivos secretos de las unidades implicadas, al balance de los gastos reservados y estuvo en cada uno de los sitios donde murió cada uno de los muchachos de Soacha e hizo una réplica de la operación. El trabajo fue tan detallado y extenuante, que la misión, que estaba diseñada para 15 días, se tuvo que extender una semana más.

Quedaron aterrados de lo que encontraron. Un desorden en el ejercicio militar que rayaba con lo criminal. “Un trabajador indisciplinado en una empresa cualquiera es un lastre, pero en una militar es un riesgo para las vidas de los demás”, explica una alta fuente. Si bien guardan con celo los resultados, SEMANA

pudo establecer algunos de los hallazgos.

En la mayoría de los casos, se repitió un *modus operandi* que no cumplía la doctrina militar básica. En primer lugar, no había ningún tipo de inteligencia previa antes de salir a la operación o, si la había, era un reporte vago, sin análisis. En segundo lugar, tampoco salían con un plan de operación, es decir, quién dirigía el grupo, cuál era la estrategia, etcétera, y en algunos casos sin poner al tanto a mandos superiores. Y, por último, hacían la operación

hay 111 muertos en combate en el último año, muchos de ellos enterrados como NN.

Estos procedimientos son la almendra de una guerra. En un conflicto como el colombiano, los militares están entrenados para seguir al pie de la letra una doctrina: “No se trata de salir a la calle a ver si encuentran a alguien mal parado para convertirlo en una baja. La baja tiene que ser producto de una operación militar plenamente justificada y planeada”, explicó otra fuente militar.

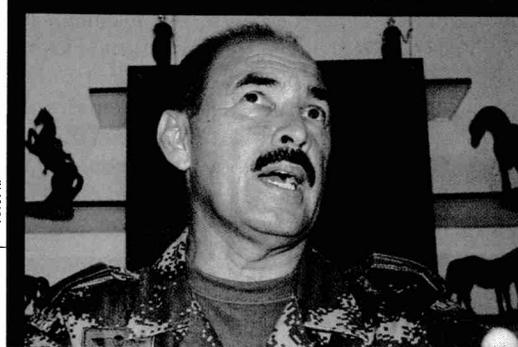
SE UTILIZARON GASTOS RESERVADOS, DE LOS 1,5 MILLONES DE PESOS DE CADA BATALLÓN, EN LOS 'FALSOS POSITIVOS' DE LOS MUCHACHOS

de noche. En los informes reportan haber encontrado una o dos sombras sospechosas que se mueven, les gritan “alto”, la ‘sombra’ dispara con una pistola y ellos responden con ráfagas de fusiles.

Y, como si fuera poco, el control que debían ejercer los mandos superiores brillaba por su ausencia. Por ejemplo, en el caso de Ocaña

Más allá de las graves fallas de procedimiento, también hallaron un reporte de gasto de munición excesivo. Por ejemplo, en un ‘combate’ en el que murió uno de los muchachos de Soacha, en su cuerpo aparecieron tres impactos de bala mientras el informe de los soldados registró la utilización de más de 1.000 municiones.

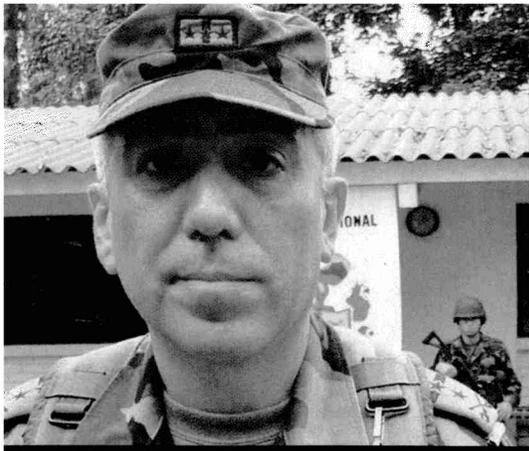
FOTO: LA OPINIÓN



◀ A los generales Paulino Coronado y José Joaquín Cortés los retiraron por algo que pocas veces ocurre: no darse cuenta de que hombres bajo su mando incurrieran en irregularidades y no aplicar el control necesario



FOTO: AP



Al coronel Herrera, que salió en un grupo de tres coroneles antes del remezón de 27 militares, lo denunció uno de sus lugartenientes porque, según él, les daba días libres por bajas en combate

Las brigadas al mando de Rafael Pico, uno de los tres generales retirados, han tenido que enfrentar escándalos de falsos positivos



FOTO: LA OPINIÓN

La comisión terminó su trabajo el viernes 24 de octubre, y el lunes siguiente, en la noche, le presentó los resultados al presidente Álvaro Uribe. Y el mandatario, que semanas antes había expresado su incredulidad de que se tratara de “falsos positivos”, comenzó a entender el macabro *modus operandi*. Desde el primer momento, Uribe se mostró dispuesto a tomar las decisiones que fuera necesario y con cierta voz de indignación dijo: “Yo presiono, pero no presiono a nadie para que haga actos criminales”.

En la reunión estaban el Ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, aunque brilló por su ausencia el comandante del Ejército, general Mario Montoya. Ya muy entrada la noche, Uribe se quedó solo con Santos y Padilla. La legitimidad del Ejército estaba en el filo de la navaja: hacía caso omiso de lo que estaba ocurriendo y retrocedía años en su imagen como institución ante el país, o daba un timonazo para pasar a la historia no sólo como el Ejército que doblegó a las Farc, sino también como el que le dio un impulso definitivo a la Fuerza Pública en materia de derechos humanos.

No dudaron en tomar decisiones drásticas. Y el miércoles a las 7:15 de la mañana las anunciaron en una rueda de prensa inusual. El retiro de 27 militares, entre ellos tres generales, cuatro coroneles y siete tenientes coroneles. Y a estos, se sumaban los tres coroneles que por su cuenta el general Montoya decidió retirar por estos mismos hechos cuatro días antes.

Sin duda era una medida ejemplarizante que, al incluir dos comandantes de división y un comandante de Brigada, mandaba un

mensaje más contundente que cualquier cartilla o curso de derechos humanos a los cerca de 250.000 soldados del país de que el gobierno no acolita ni se hace el de la vista gorda ante las muertes fuera de combate.

Los tres generales retirados –José Joaquín Cortés, Paulino Colorado y Roberto Pico– salían no necesariamente por ser ellos los directamente implicados, sino por no haber evitado, ni detectado, ni corregido las fallas tan evidentes de sus hombres. En el caso del general Pico, comandante de la séptima división y un general formado bajo la tutela del general Mario Montoya, llama la atención que las cinco brigadas a su cargo (4, 11, 14, 17 y la móvil 11)

tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando a los criminales, cuando son los verdaderos criminales los asociados con integrantes del Ejército para cometer estos crímenes, para desorientar y para mantener esos criminales intacto el teatro de acción de su actividad delictiva”.

Esas palabras significaban un cambio de 180 grados en lo que había sostenido un año antes Uribe en la inauguración de las sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por primera vez sesionó en Colombia. En ese entonces había dicho: “En Colombia no hay ejecuciones extrajudiciales, como lo señalan algunos sectores

FOTO: AP

LA FISCALÍA INVESTIGA MÁS DE 600 CASOS DE FALSOS POSITIVOS Y HA IDENTIFICADO OCHO SIMILARES A LOS DE SOACHA EN EL PAÍS

hay sido protagonistas de escándalos de supuestas ejecuciones extrajudiciales.

El presidente Uribe fue más allá de las fallas administrativas en las que incurrieron los militares: “Estos hallazgos muestran que en algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército. Crímenes que en algunas regiones

críticos al gobierno, pues, desde 1910 el país eliminó la pena de muerte”. Y atribuyó las denuncias a una estrategia contra el Ejército: “Cuando avanza la acción contra la guerrilla, cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial”.

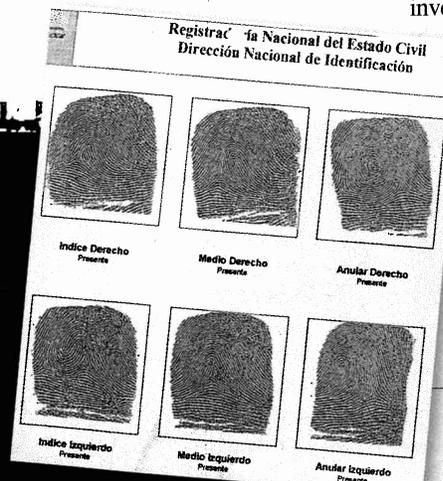
POR TODO EL PAÍS

¿Cuál es la verdadera dimensión del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales? El caso de Soacha se convirtió en el símbolo del destape, pero no es el único. La Fiscalía investiga 657 casos que involucran a 688 militares y de ellos han sido condenados 43 y hay otros 12 casos en juicio. A esto se suma que la Procuraduría está investigando por presuntas ejecuciones extrajudiciales a 2.742 miembros del Ejército, una tercera parte de ellos por hechos ocurridos en 2007.

Así, pos Soacha, han empezado a salir a la luz todo tipo de casos. Desde el lustrabotas que se llevaron del Parque Centenario de Bucaramanga en agosto y dos días después murió “en combate”



◀ El caso de José Mesa destapó el escándalo en Soacha. En enero lo enterraron como NN, en agosto conocieron su identidad por sus huellas digitales y le avisaron a su familia





El llamado 'body count' o conteo de bajas llevó a Estados Unidos a cometer errores estratégicos y perder la guerra en Vietnam

En 2004, Michael Frühling le advirtió al presidente Uribe sobre el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales que se estaba detectando desde 2003

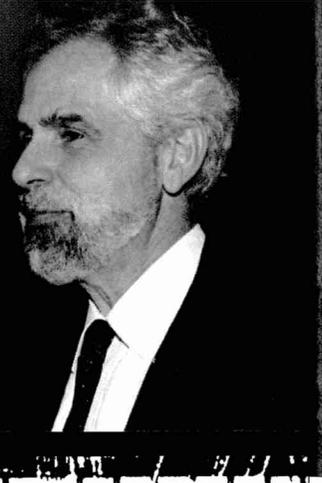


FOTO: AFP
en Catatumbo, hasta los dos vendedores de dulces del Parque de Berrío de Medellín, que se fueron con alguien que les ofreció trabajo en una finca y aparecieron 12 días después como guerrilleros muertos en San Roque (Antioquia). Algo parecido les había ocurrido dos años antes a otros tres jóvenes que estaban en el Parque de Bolívar de Medellín, un hombre al que le decían el 'Gato' les ofreció subirse a un taxi para ir a buscar un trabajo, y al día siguiente aparecieron muertos en combate en Montebello (Antioquia). Y la misma dosis les aplicaron a tres cotereros de la plaza de mercado de Sincelejo en 2005. A las 2 de la tarde del 16 de diciembre llegó un taxi con dos personas buscando mano de obra que iban a pagar bien, estos se subieron y al día siguiente eran tres bajas más del Ejército en El Roble (Sucre).

No todos los supuestos 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales son iguales. Hay cuatro tipos de casos distintos. Se da el falso positivo por ocultamiento. Es decir, que no existía la intención de asesinar a un inocente,

Y el cuarto caso, es el de Soacha, que es el más reciente y el más preocupante porque implica además una macabra sociedad con la mafia. La Fiscalía ha identificado otros ocho casos con un *modus operandi* similar, como el de 11 jóvenes de Tolúviejo (Sucre) que aparecen muertos en Chinú (Córdoba), los tres de Barranquilla que aparecen en Sahagún (Córdoba) y los tres de Chinchiná (Caldas).

En estos casos hay de por medio un reclutador que se mueve bien en la zona donde viven los muchachos, pero tiene nexos con bandas emergentes de otras partes del país. En Bogotá, han identificado 19, según un investigador del caso Soacha, a los cuales les pagan en promedio 300.000 pesos por muchacho. Estos reclutadores se hacen conocer de jóvenes de barrios de estratos 1 y 2 y les ofrecen un trabajo, no siempre legal pero sí jugoso en dinero, que resulta ser falso. Los llevan al sitio y a los pocos días aparecen muertos en combate.

La tesis que se maneja es que las bandas emergentes son las que corren con esos gastos

la Fiscalía como la Procuraduría (ver gráfica página 34). El número de denuncias era tan preocupante, que en 2004 Michael Frühling, para entonces director de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, se reunió con el presidente Uribe en la Casa de Nariño y lo puso al tanto. Y en 2006, se conocieron cerca de 30 casos de falsos positivos bastante escandalosos en Antioquia. Pero todo parecía ser un asunto de algunos mandos medios o bajos descarriados.

Es importante recordar que se trata de un Ejército que en menos de cuatro años pasó de 181.000 hombres a 241.000 y no hubo tiempo suficiente para formar todos los mandos que se necesitaban. Además, la filosofía del *body count* (el conteo de las bajas), que puede resultar tan pernicioso, aún no se ha podido erradicar. En algunas guarniciones mantienen vigentes incentivos perversos como dar días libres por bajas. Otros estímulos como las recompensas, que si bien se les dan a civiles, también estimulan la corrupción de militares.

Y sin duda, el debilitamiento, cada vez mayor, de la guerrilla, deja a una cantidad de hombres de brazos cruzados a los que todavía hoy no les dan instrucciones precisas de qué hacer para consolidar las zonas en las cuales ya derrotaron al enemigo. No es lo mismo la "guerra" que tiene que dar la brigada 13 en Cundinamarca, donde hace varios años la Operación Libertad 1 desalojó a las Farc, que el papel que está jugando hoy la Fuerza de Tarea Omega combatiendo al grupo más fuerte de la guerrilla en el río Duda.

Por lo pronto, los militares siguen tratando de digerir lo ocurrido. El comandante de las Fuerzas Militares dice que ahora van a fortalecer la inspección en cada una de sus guarniciones. Y la Fiscalía y la Procuraduría siguen a todo vapor con la investigación del caso de los muchachos de Soacha para determinar qué responsabilidades penales caben.

Robert Jairo, sin duda, no tenía la menor idea de que había destapado una verdadera caja de pandora en el corazón de las Fuerzas Militares. ■

A UN LUSTRABOTAS LO LLEVARON DEL PARQUE CENTENARIO DE BUCARAMANAGA Y DOS DÍAS DESPUÉS MURIÓ EN COMBATE EN CATATUMBO

pero al hacerlo, no admiten el error, sino que lo presentan como guerrillero. Es el caso de Cajamarca.

El segundo es el de "limpieza social". Con el ánimo de aumentar las bajas, deciden matar personas en un alto grado de vulnerabilidad y por quienes, suponen ellos, nadie va a preguntar. Son múltiples los ejemplos que tiene la Fiscalía, entre ellos los llamados loquitos que deambulan por los cascos urbanos, drogadictos y muchachos con antecedentes judiciales.

El tercero es la táctica paramilitar. Las víctimas son personas que les resultan sospechosas de vínculos con la guerrilla, pero por falta de pruebas no pueden capturar. Entonces deciden matarlos simulando un combate.

Y su propósito es ponerles en bandeja de plata a los militares a un joven que, tras una farsa de combate, termina siendo un 'positivo' que le suma puntos a la hoja de vida de la guarnición militar. En contraprestación, los militares dejan tranquilos a los delincuentes. Y de paso se hace otro tipo de negocios: la munición que se registra como gastada en el combate puede terminar en manos de la mafia y los gastos reservados que se usan para inteligencia pueden terminar en manos de un civil testaferro del militar corrupto.

¿Por qué se dan estas ejecuciones extrajudiciales? ¿Tiene alguna relación con el fin de los paras? No es descartable esa hipótesis. A partir del año 2003, se empezó a notar un incremento en los casos que investigaban tanto